



Díaz activará los Erte y vetará despidos en empresas con ayudas si se agrava la guerra

Trabajo publicará el coste fiscal de las medidas que adopte, a petición de los sindicatos

Noelia Casado MADRID.

El Ministerio de Trabajo se reunieron ayer con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT para hacer una primera evaluación de los efectos generados por el conflicto desatado en Irán tras el ataque de EEUU e Israel el pasado fin de semana y revisar el listado de medidas que podrían ponerse en marcha en materia laboral para paliar los daños que esta situación podría generar en las empresas y el empleo. Yolanda Díaz inició así un espacio de monitorización de la guerra en el que se ha comprometido a publicar el coste fiscal de las políticas que se adopten.

Al encuentro, que tuvo lugar en la sede del departamento de Trabajo no ha acudido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que ha aludido a problemas de agenda para asistir a la reunión tras semanas en las que el líder empresarial y la vicepresidenta han cruzado reproches en público. Sí se desplazaron hasta allí la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Martínez, y las negociadoras habituales de ambas organizaciones empresariales.

Por parte de los sindicatos, han asistido los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, así como los responsables de Acción Sindical que ejercen como interlocutores habituales del Ministerio. Los representantes de los trabajadores han planteado a Díaz la demanda de hacer público el coste fiscal de las medidas que puedan llegar a ponerse en marcha, como sería el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con el fin de acabar con el discurso “antiimpuestos”.

Según explicaron los participantes al término de la reunión, ninguna de las partes ha planteado poner



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

El Gobierno no tiene previsto aprobar nuevas reformas laborales para hacer frente a la crisis

en marcha políticas públicas diferentes a las activadas en la pandemia, la crisis de precios generada por la guerra de Ucrania o la amenaza arancelaria de EEUU. “Estamos preparándonos, lo que hacemos es actuar ex ante, lo hemos hecho en la Dana, en Andalucía y lo vamos a volver a hacer” declaró Díaz, que ha mandado un mensaje de tranquilidad a empresas y autóno-

mo, puesto que el Gobierno ya cuenta con un marco que podría activar en cualquier momento.

En este paquete de medidas se encuentra la prohibición del despido objetivo por causas relacionadas con la crisis para las empresas que se beneficien de ayudas públicas o bonificaciones; los ERTE o Mecanismo Red que permiten recortar las jornadas de trabajo o suspender los contratos de trabajo y que podrían activar de forma inmediata si se da una caída de la actividad; bonificaciones a empresas, fraccionamiento o aplazamiento del pago de algunos impuestos y modificar los requisitos para acceder al paro o el cese por actividad.

El Gobierno también podría mandar que las empresas que lo ten-

gan en su mano apliquen el teletrabajo, activar permisos retribuidos para no acudir al trabajo, dar flexibilidad horaria a los trabajadores, aprobar planes de empleo extraordinarios. Trabajo también menciona políticas que escapan de su competencia exclusiva, como la recuperación de la excepción ibérica que topaba el precio del gas, el control de los precios energéticos o la bonificación del gasóleo a profesionales.

Según explicó la vicepresidenta segunda, el Gobierno ha mantenido una reunión interna para hacer un seguimiento de la situación global en la que se ha decidido mantener una postura contraria a esta guerra ilegal, llevar a cabo una actuación defensiva y en el marco de la Unión Europea.

Los autónomos reclaman rebajas de cuotas y en el combustible

N. C. MADRID.

Las organizaciones de trabajadores autónomos ATA, UATAE y UPTA se han reunido este jueves con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar la situación económica generada por el estallido de un conflicto en Irán y plantearle qué medidas podría adoptar para responder a la crisis. Mientras que la organización integrada en CEOE se decanta por monitorizar la situación internacional antes de reclamar políticas concretas, las organizaciones vinculadas a CCOO y UGT reclamaron a Moncloa la puesta en marcha de un paquete de medidas que rebaje las cuotas a la Seguridad Social, permita aplazar el pago de impuestos como el IRPF o el IVA e incluya bonificaciones al combustible.

“Las y los trabajadores autónomos, que representan más de 3,4 millones de personas en España, constituyen uno de los colectivos más vulnerables ante este tipo de crisis, al carecer de márgenes financieros suficientes y actuar como primer eslabón de transmisión de los sobrecostos hacia el conjunto de la economía” explica UATAE en el documento que contiene sus propuestas. La asociación solicita al Gobierno “la adopción urgente y coordinada de un paquete de medidas específicas para evitar el cierre de actividades, la destrucción de empleo y la pérdida de tejido productivo” sobre todo en sectores estratégicos y más expuestos, como el transporte, la agricultura y el comercio.

La organización que lidera María José Landaburu plantea que se apliquen tipos reducidos de forma temporal a la electricidad y el gas para uso profesional, los combustibles profesionales y suministros esenciales para el desarrollo de las actividades más expuestas.